

Vicente Andrés de Cabo, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra Resolución de 11 de enero de 1985, se ha dictado sentencia con fecha 19 de abril de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Vicente Andrés de Cabo contra la Resolución dictada por la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa de fecha 11 de enero de 1985, resolviendo en reposición la pronunciada en 5 de octubre de 1984, por medio de la cual denegó al recurrente el ascenso al empleo efectivo de Sargento, al amparo del artículo 19 de la Ley 5/1976, de 11 de marzo. Sin imposición de costas.

Esta resolución es firme y frente a la misma no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de los extraordinarios de apelación y revisión en los casos y plazos previstos en los artículos 101 y 102 de la Ley de la Jurisdicción.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos».

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 31 de octubre de 1986.-P. D., el Director general de Personal, Federico Michavila Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y General Director de Mutilados.

30074 *ORDEN 713/38940/1986, de 31 de octubre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 29 de abril de 1986, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Trujillo Machacón.*

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido en única instancia ante la Sección de la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes, de una, como demandante, don Francisco Trujillo Machacón, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdo del Consejo Superior del Ejército de 17 de noviembre de 1983, se ha dictado sentencia, con fecha 29 de abril de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando, parcialmente, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don José Luis Ortiz-Cañavate y Puig-Mauri, en nombre y representación de don Francisco Trujillo Machacón, debemos declarar y declaramos la nulidad del acuerdo del Consejo Superior del Ejército de 17 de noviembre de 1983 -notificado mediante comunicación de 24 de febrero de 1984-, en cuanto que no especifica los presupuestos objetivos tenidos en cuenta para, en el ejercicio de una potestad discrecional, denegar el ascenso honorífico a General de Brigada de Infantería, solicitado por el recurrente y, en consecuencia, debemos reconocer y reconocemos a dicho recurrente el derecho a que se dicte nueva resolución en la que se contengan tales presupuestos, no habiendo lugar a la petición formulada por el señor Trujillo Machacón de que se declare por la Sala, en esta resolución, su derecho a ser ascendido al empleo honorífico de General de Brigada de Infantería, sin hacer pronunciamiento expreso sobre costas. Esta resolución es firme, y frente a la misma no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de los extraordinarios de apelación y revisión en los casos y plazos previstos en los artículos 101 y 102 de la Ley de la Jurisdicción.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos».

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 31 de octubre de 1986.-P. D., el Director general de Personal, Federico Michavila Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y General Jefe del Mando Superior de Personal del Ejército.

30075 *ORDEN 713/38942/1986, de 31 de octubre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 17 de mayo de 1986, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Consuelo Melero Venzala.*

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, doña Consuelo Melero Venzala, quien postula por sí misma, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resolución del Ministerio de Defensa de 2 de julio de 1984, se ha dictado sentencia con fecha 17 de mayo de 1985, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don José Gayoso Díaz, en nombre y representación de doña Consuelo Melero Venzala, contra la resolución del Ministerio de Defensa de 2 de julio de 1984, dictada en el expediente administrativo a que se refieren estas actuaciones, resolución que anulamos por no ser conforme a Derecho en cuanto que, a los efectos de aplicación de los beneficios del Real Decreto-ley 6/1978, determinó como empleo que hubiera alcanzado el marido de la recurrente el de Cabo Primero, y declaramos que el indicado empleo hubiera sido el de Capitán, con las consecuencias legales inherentes a esta declaración, y no hacemos expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido para su ejecución, junto con el expediente, a la oficina de origen, lo pronunciamos, mandamos y firmamos».

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 31 de octubre de 1986.-P. D., el Director general de Personal, Federico Michavila Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y General Jefe del Mando Superior de Personal del Ejército.

30076 *ORDEN 713/38943/1986, de 31 de octubre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 13 de junio de 1986, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Blasco Mur.*

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Nacional, entre partes; de una, como demandante, don Antonio Blasco Mur, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa, se ha dictado sentencia con fecha 13 de junio de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos improcedente el recurso de revisión promovido por la Procuradora doña Consuelo Rodríguez Chacón, en nombre y representación de don Antonio Blasco Mur, contra la sentencia firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia Nacional, de fecha 13 de abril de 1984, por la que, estimando, en parte, el recurso 52.019, promovido por el hoy recurrente, anuló las resoluciones del Ministerio de Defensa en aplicación del Real Decreto-ley 6/1978, fijó el empleo de Cabo Primero como el que habría alcanzado por antigüedad, de haber continuado en activo, y declaró en su lugar que debía ser el de Brigada, condenando al recurrente en todas las costas causadas y a la pérdida del depósito constituido.

Así por esta nuestra sentencia firme, que se notificará a las partes, con indicación de que no cabe recurso alguno, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos».

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 31 de octubre de 1986.-P. D., el Director general de Personal, Federico Michavila Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Jefe del Mando Superior de Personal del Ejército.